

Allende con nosotros

Eugenio Tironi

La Moneda, 30 septiembre 2008 ♦

Los aniversarios —dicen— son ocasiones para hacer balances, poner en alguna imaginaria balanza lo blanco y lo negro, lo ganado y lo perdido, los haberes y los debes. Y con las cifras que nos quedan en las manos, exorcizar esos fantasmas del pasado que no nos dejan hilvanar el futuro en paz. Porque sólo así podremos volver a soñar, imaginar, planificar y celebrar nuestras vidas.

Si esto es válido para las personas y las familias, lo es también para las comunidades y las naciones.

Pienso que, como comunidad y como nación, hay un fantasma que aún no logra ser integrado a nuestra memoria común: me refiero a la figura del Presidente Allende. Y por esto mismo no debemos dejar de aprovechar el centenario de su nacimiento para volver una y otra vez sobre su imagen y su recuerdo. Y quizá tengamos que volver sobre ellos muchas más veces aún, hasta lograr descubrir ahí sus huellas en la nación que somos.

Hoy quisiera recordarlo con ese rostro que el tiempo le ha ido dejando, y que no es el tradicional de las estatuas. Éstas siempre están varios metros sobre nuestras cabezas, y ya nada tienen que hacer con nuestras vidas. Al Allende que recuerdo, en cambio, es ese que terminó quitándose la vida aquí en La Moneda, en La Moneda bombardeada.

Porque si Allende no hubiese muerto así —me lo he planteado muchas veces—, mi vida, como la de muchos otros como yo, habría sido otra. Quienes habíamos apostado por las promesas de la Unidad Popular, probablemente nos hubiésemos resignados al fracaso de ese proyecto y emprendido nuevos caminos. Después de todo, ¡éramos tan jóvenes! Pero no pudimos desentendernos de la muerte del Presidente, lo que nos llevó a destinar los siguientes años —de una manera o de otra— a pagar una deuda contraída ese 11.

El gesto de Allende nos polarizó dramáticamente las alternativas: podíamos seguir su ejemplo y dedicar la vida a resistir a la dictadura y a recuperar la democracia, o traicionar su memoria. Y eso marcó lo que hicimos durante muchos y largos años.

Y, también, sin ese último gesto de Allende, otro habría sido el curso de nuestra historia como país. Si ese martes 11 él hubiese buscado una salida negociada, posiblemente el régimen que lo destituyó y lo sustituyó no habría actuado con la crueldad con que lo hizo, y tampoco habría realizado la radical revolución que emprendió, con los costos que ello significó para el país, y también con los nuevos caminos que abrió.

Para la izquierda, entonces, y también para Pinochet, la figura de Allende llevó a que no hubiese vuelta atrás. Marcó los años por venir de manera ineludible además de indeleble.

Por supuesto, no se trata, a estas alturas, de hacer hagiografías de Allende. Ni siquiera fui allendista en su momento. A los ojos de los jóvenes de izquierda que éramos por ese entonces, movidos por el catolicismo progresista de la época, Allende representaba la democracia chilena de mediados del siglo 20. Una democracia progresista, sí, pero más volcada a la retórica que a la acción, al acomodo que al cambio. A ese Allende no le tuve simpatía. Pero ese no es el Allende que emergió el 11 de septiembre. El que quedará en la

♦ Conferencia dictada en La Moneda, a invitación de la Presidente Michelle Bachelet y con su presencia, con ocasión de la conmemoración de los 100 años del natalicio de Salvador Allende Gossens. Ésta será publicada próximamente en un libro editado por la Presidencia de la República.

memoria larga de Chile es aquel que resiste a la fuerza en defensa de sus principios —y, de paso, de la Constitución—; que no cede a las amenazas ni acepta transacciones; que termina quedándose aquí en La Moneda bombardeada.

Fueron apenas unas horas en el curso de una vida, pero bastaron para clausurar un ciclo en la historia de Chile, y marcar profundamente la evolución posterior del país.

El consenso del 20

En general, solemos recordar a Allende por esas horas decisivas y por los apenas mil días de su gobierno. Pero no debemos pasar por alto que él fue protagonista central de buena parte del siglo 20 chileno. Por supuesto, quisiera poder rastrear los signos de nuestros tiempos hasta esos años, hasta 100 años atrás, pues seguramente de entonces, y de mucho antes, vienen las corrientes y los vientos que nos han traído hasta el lugar en que estamos. Pero mis herramientas, como sociólogo, son las del tiempo corto, y no voy a pretender jugar al historiador, que para eso hay muchos y muy buenos.

Sólo quisiera anotar que, si se observa el tipo de orientación de Chile desde los años treinta hasta el golpe de Estado de 1973, lo que se concluye es que la imagen (o fantasía) que guió la conducta de su clase dirigente, tanto política como intelectual, empresarial, sindical, militar y religiosa, fue un modelo de desarrollo del que Allende fue un actor político clave. Fue un modelo que él contribuyó a forjar, no uno que (como tantas veces hemos debido escuchar) se habría encargado de destruir. Porque el ideario de Allende también estaba estructurado en gran parte en torno a los mismos fundamentos que —siguiendo la clasificación clásica de Aníbal Pinto—, constituyeron los tres pilares de ese modelo vigente a lo largo del siglo 20: la industrialización apoyada por el Estado y orientada a la economía doméstica, un sistema político en lenta pero gradual expansión, y la incorporación de nuevos grupos sociales al sistema: léase clases medias, trabajadores, campesinos y, finalmente, marginales urbanos.

Más aún, a partir de 1929, todas las corrientes políticas, de izquierda, de centro y de derecha, coincidieron en ese modelo y en su estrategia de desarrollo. Sus diferencias no eran más que variaciones sobre la forma de combinar sus tres componentes básicos. Y fue un modelo bastante exitoso, que le permitió a Chile desplegar una historia de logros en el concierto latinoamericano, con su incipiente industrialización, un sistema democrático notablemente estable y la ausencia de crisis sociales de envergadura, por lo menos hasta la década de los sesenta.

No todo fue miel sobre hojuelas, obviamente. El crecimiento económico fue mediocre, especialmente si se tiene en cuenta el explosivo aumento de la población en el período 1920–60, en particular aquella ubicada en áreas urbanas. Esto es lo que explica, básicamente, el escaso avance del ingreso per cápita en el período. Y esta mecánica del crecimiento —o no crecimiento— económico tenía, además, un sello propio de esos tiempos: se consideraba generalizadamente que la salida a las épocas de constricción económica era responsabilidad neta del Estado.

Así, inspirada en el ejemplo de la Europa del la post-guerra y en el “new deal” estadounidense, la clase dirigente chilena empleó al Estado para alcanzar el objetivo de la industrialización. Y junto con eso, cerró las puertas a la economía del exterior para proteger a la incipiente industria nacional, mientras buscaba crear un mercado doméstico. Es lo que se llamó el “modelo de sustitución de importaciones”. Como señala Arturo Valenzuela, en los años sesenta “el Estado ejercía un rol más importante en la economía nacional que en

cualquier otro país de América Latina, con la excepción de Cuba”, pues era el que “trazaba el curso del crecimiento económico e intervenía en la fijación de precios”.

Un Estado robusto como ése requería un sector público también fuerte. Muy a la usanza europea, se creó un poderoso núcleo de altos funcionarios y ejecutivos que respondían a los intereses institucionales del Estado antes que a los gobiernos de turno, y que gozaban de gran estabilidad en sus puestos. La clase empresarial, por su parte, mantenía estrechos vínculos con el gobierno, sea para protegerse de la competencia foránea mediante aranceles, o para obtener tarifas y precios adecuados, o conseguir subsidios. Los gremios empresariales participaban en los directorios de las grandes empresas y de los entes estatales orientados a la promoción productiva (como la Corfo), y ejercían una fuerte influencia en el diseño de las políticas económicas.

En este marco, sí se hicieron esfuerzos a favor de la industrialización del país. Pero ellos no tuvieron la fuerza suficiente para ampliar las perspectivas de la economía chilena, que hasta 1973 siguió basándose fuertemente en la exportación de materias primas, en una especie de “colonialismo” económico respecto de las naciones desarrolladas. Esto explica su inestabilidad —dependía nítidamente de mercados externos—, que se tradujo en breves períodos de auge seguidos de otros de depresión.

Los procesos de inclusión

En la construcción del Chile siglo 20 a que me estoy refiriendo, ahora desde el punto de vista de la sociedad, un hecho fundamental fue la explosiva concentración de la población en las grandes urbes: pasó del 49 por ciento del total en 1930, al 70 por ciento en 1970. Esta situación tuvo profundas repercusiones en la estructura social, entre las cuales no fue menor la generación de mayores posibilidades de organización y de movilización. Se produjo un robustecimiento del sindicalismo, basado tradicionalmente en las clases medias urbanas (especialmente funcionarios públicos) y en los trabajadores fabriles y mineros. De hecho, hacia 1970 la tasa de sindicalización alcanzaba a 23 por ciento de los empleados, incluyendo a los campesinos, que durante los años sesenta se sindicalizaron masivamente. A esto hay que sumar las organizaciones territoriales, como juntas de vecinos, centros de madres, clubes juveniles, etcétera, que tuvieron un crecimiento explosivo en la década de los sesenta.

En suma, los grupos sociales emergentes, que exigían una mayor participación en los beneficios del sistema, se fueron organizando y movilizándose. Este proceso, sin embargo, no se hizo en Chile contra el Estado, sino desde el Estado, que ejercía un rol clave en las negociaciones colectivas en el nivel de la empresa, y que bajo Frei Montalva promovió la organización sindical campesina y la vecinal.

Y no sólo la participación social se fue ampliando, también lo hizo la participación política formal. Si hacia 1925 la participación electoral era escasa, pues se reducía a los hombres alfabetos mayores de 21 años, ella fue creciendo gradualmente, primero con la incorporación de la mujer en 1952 (aunque la ley fue aprobada en 1949), luego con la eliminación de los “pactos electorales” y la simplificación del registro y las papeletas en 1962, y finalmente con la incorporación de los analfabetos y menores de 18 años en 1970. Esto permitió que entre 1961 y 1970, el electorado pasara del 16 al 28,3 por ciento de la población total.

En general, entonces, el rostro político del Chile que va de los años 1930 a 1973 también tuvo una impronta típicamente europea. Así lo dicen sus instituciones democráticas

relativamente estables, la alternancia en el poder, el peso político de los numerosos sindicatos, asociaciones profesionales y gremios, un fuerte debate intelectual a través de una prensa libre, por nombrar sólo algunos de sus rasgos. Y a ellos habría que agregar algo de no menor peso, como un Poder Judicial independiente del Poder Ejecutivo, pero que nunca fue un impedimento para que las mayorías políticas implantaran sus reformas —eso a diferencia de lo que ocurre Estados Unidos—.

En este período, años 30 a 73, Chile mantuvo, además, un rasgo que lo caracteriza desde la Colonia: una estructura del Estado altamente centralizada, que dejaba mínimos márgenes de autonomía a las provincias o comunas para desarrollar políticas propias. Y otro que es peculiar de Chile en el concierto latinoamericano: un sistema de partidos fuerte e institucionalizado. Esto permitió “el cuasi monopolio de la actividad política y de los puestos del sistema político por parte de una elite partidista dedicada a la política como profesión”, como indica Yoccelevski. Los partidos políticos estaban presentes en todos los intersticios de la sociedad: Parlamento, gobiernos comunales, reparticiones públicas, sindicatos, organizaciones de industriales y terratenientes, prensa, instituciones de enseñanza, organizaciones vecinales, organizaciones de artistas e intelectuales, etcétera. Este panorama presentaba una “sorprendente la similitud” con Europa, y “particularmente con el sistema existente en Francia durante la Tercera y la Cuarta Repúblicas”, como lo hiciera notar Federico Gil en su célebre libro sobre el sistema político chileno.

Durante gran parte del siglo 20, los partidos de centro y de izquierda, con el respaldo de los centros mineros y las ciudades y el apoyo del movimiento sindical, fueron actores centrales en el auge y caída de coaliciones y gobiernos. Desplegaron grandes movilizaciones, como las que se realizaron a fines de los años veinte y mediados de los cincuenta, provocando con ellas importantes giros del escenario político.

Los partidos Comunista y Socialista fueron parte del gobierno, primero a través del Frente Popular en la administración de Aguirre Cerda entre 1938 y 1941, y después en forma accidentada y parcial (vía alguna fracción socialista) casi hasta 1958. Por su parte, el Partido Radical, de una u otra manera, estuvo en el gobierno hasta 1964, y a partir de entonces y hasta 1970, el Ejecutivo estuvo en manos de un partido de centro católico reformista, el Partido Demócrata Cristiano. Así, el sindicalismo, la izquierda y el centro laico y católico ejercieron una influencia decisiva en la definición de las políticas públicas del período. Todo esto, con un tinte muy semejante al panorama europeo de la época, influyó decisivamente para darle al Chile del siglo 20 un sesgo socialmente progresista. Y en todo ello siempre estuvo presente la figura incansable de Salvador Allende, ya sea en la fundación del Partido Socialista en los años treinta, o como diputado del Frente Popular por Valparaíso y Aconcagua, como ministro de Salubridad de Aguirre Cerda, como senador desde 1945 a 1970, incluso en la presidencia del Colegio Médico o con sus cuatro candidaturas a la Presidencia de la República.

El “sueño europeo”

Así, a mediados del siglo 20 se había logrado levantar una suerte de Estado-Proveedor o de Bienestar inspirado en el ejemplo europeo —aunque, a diferencia de aquel, el chileno atendía sólo las demandas de los sectores urbanos, y en especial de las clases medias, dejando en la marginalidad más extrema el mundo campesino—. En esta línea, se creó un sistema público de educación que, en el curso de los años, se fue expandiendo gradualmente, siguiendo un modelo muy francés: vertical, formal, centrado en la

instrucción. Se creó también —y en esto Allende tuvo una participación directa— un sistema de atención de salud estatal igual para todos y se puso en marcha un sistema de previsión social de tipo colectivo o solidario administrado por el Estado. Se instauró un Código del Trabajo extremadamente rígido, con muchas prerrogativas en manos del Estado, entre ellas un rol clave en las negociaciones colectivas en el ámbito de la empresa. El Estado asumió, asimismo, un papel activo en materia de vivienda para cubrir el déficit provocado por los procesos migratorios, con marcados esfuerzos para evitar la segregación de la ciudad. A fines de los sesenta, el Estado incluso asumió como propia la creación de la televisión, tomando otra vez como ejemplo —aunque con variaciones, como fue la de incorporar a las universidades— el modelo público de la Europa de entonces. Todo esto fue creando una burocracia pública numerosa y bien organizada que, amparada en la nobleza de su rol, ejercía una gran influencia en la política chilena.

Las condiciones que hicieron posible el proto-Estado de Bienestar chileno fueron, finalmente, muy semejantes a las que concurrieron en el caso de Europa continental: sistemas electorales proporcionales, movimientos sindicales fuertes, partidos de izquierda y de centro católicos, poderosos e influyentes, Estados altamente centralizados y un Poder Judicial independiente, pero sin potestades para imponer su punto de vista al poder político. El sistema institucional se concebía orientado a promover la igualdad, no la libertad individual. Se dejaba al Estado la responsabilidad de promover la integración de la población al sistema, tanto desde un punto de vista jurídico-institucional como laboral-económico. Por ende, el sistema de protección y movilidad social se basaba preferentemente en la acción colectiva dirigida a conseguir la atención del Estado. De aquí la importancia de la política y de los partidos, así como del sindicalismo y la organización vecinal, entre otras. Imperaba, además, una concepción según la cual no era en la economía ni en el consumo, sino en la educación y la cultura, donde se medía el éxito y el prestigio de las personas. Todo ello iba de la mano con la diseminación de una cierta cultura popular de tinte igualitarista.

El mundo intelectual y artístico de la época, vinculado estrechamente al ámbito público, significó un enorme apoyo a las fuerzas progresistas que dieron forma al Estado de Bienestar chileno en el período 1930–73. Pero hubo dos instituciones de primera importancia en este proceso, y a las que no siempre se destaca lo suficiente: las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Las primeras, en 1924, impusieron una serie de reformas sociales que resultaron clave para la constitución del Estado de Bienestar chileno. En cuanto a la Iglesia Católica, ya desde el siglo 19 conjugó una posición doctrinal conservadora con un fuerte compromiso social, orientado a la protección de los más desvalidos y a la promoción de la educación; y en el siglo 20, influenciada por la doctrina social, dio la espalda a las posiciones pro-oligárquicas y políticamente conservadoras, y abrazó sin ambages los proyectos sociales impulsados por el centro y la izquierda.

El “sueño chileno” de entonces era, pues, una sociedad fundada en un Estado que premiaba el mérito con un apoyo generoso, proveía educación, salud y previsión, protegía a los individuos de las fatalidades y, a la vez, regulaba el mercado para defender el bien común; una sociedad donde los poderes religiosos no resistían sino que se sumaban al avance de la lógica secular y republicana, donde la cultura se hacía cada vez más liberal y donde la democracia iba avanzando más allá de lo “formal”.

Tal parecía ser “el alma de Chile”, quizá una construcción mental tan abstracta y desmaterializada como su bandera o su escudo o su “cielo azulado”. Pero en la cual creímos.

Desgaste y tensiones

Poco a poco, sin embargo, el modelo de tipo europeo que imperó en Chile desde los años treinta del siglo pasado fue mostrando signos de desgaste. Un desgaste paulatino, quizá subterráneo, no fulminante —“en Chile no pasan esas cosas”, solíamos inventarnos ante las catástrofes de países vecinos—, pero que fue avanzando hasta estallar en una crisis cuya primera señal se tuvo en 1970, con el estrecho triunfo de Allende en las elecciones presidenciales y el intento de evitar su asunción mediante una asonada cívico-militar. La segunda y definitiva señal de ese desgaste fue el golpe de Estado de 1973.

La visión que se ha difundido, tanto en el pensamiento de izquierda como en el neoliberal pos-73, es que el origen del agotamiento del viejo modelo histórico, la raíz de su desgaste, fue el escaso dinamismo de su economía. Lo que habría fallado habría sido un determinado tipo de desarrollo capitalista que, al no generar el necesario dinamismo de la economía, precipitó —como en la teoría del dominó— tensiones sociales y políticas que acabaron con la democracia. Pero esto no es evidente. El ritmo de crecimiento del país no fue brillante (en especial, como decía, si se tiene en cuenta el explosivo aumento de su población), pero su economía nunca dejó de crecer. Es más, en la segunda mitad de los sesenta, en la primera etapa del gobierno de Frei Montalva, el desempeño económico de Chile fue bastante satisfactorio y equilibrado. Sólo a partir de 1968, en parte por efecto de una aguda sequía que generó escasez de alimentos, se detonó una inflación galopante, desequilibrios serios en la balanza de pagos y un crecimiento mediocre. Pero nada de esto justifica la leyenda negra respecto de la incapacidad intrínseca de la economía chilena del siglo 20 para sostener la integración social y la expansión democrática. Es una leyenda curiosamente creada a dos manos —*al alimón*, como se dice en el toreo— por una izquierda ganosa de achacar todos los males al capitalismo dependiente para precipitar su derrumbe, y una derecha neoliberal interesada en tirar a la hoguera un modelo capitalista de corte europeo.

La verdad sea dicha, el desgaste del modelo de desarrollo imperante en Chile en gran parte del siglo 20 no habría obedecido tanto a una inercia propia de su naturaleza, como a voluntades políticas. Pero no sólo a eso. También es necesario tener en cuenta ciertas dimensiones sociológicas. La primera es la presión demográfica, ya mencionada antes. La segunda es la demanda de grupos sociales excluidos. Amparados en sus recién adquiridos derechos democráticos y en el discurso integracionista de la clase dirigente, exigían un puesto en la mesa para participar de los beneficios del desarrollo. Sus demandas iban dirigidas hacia el Estado, que en el modelo en cuestión aparecía como el gran garante y benefactor. Por lo mismo, al secular conflicto entre trabajadores y capitalistas se agregó un conflicto mucho más amplio: el que se dio entre los grupos incorporados al sistema (que incluía a los trabajadores y las clases medias), y aquellos marginados del mismo, como los campesinos y los pobres urbanos. Éste es un período en que, como observa María Angélica Illanes, “el pueblo pasó a ser el tema central de la sociedad chilena”.

Ahora, tampoco es justo achacar a la movilización social la causa de la crisis que terminó con el colapso del sistema político chileno a comienzos de los setenta. Como ha señalado Arturo Valenzuela, “la crisis política se inició antes que la movilización social de los grupos nuevos y la más peligrosa contramovilización de los intereses establecidos. (...) la movilización en Chile, más que la causa de una crisis inminente, fue un síntoma de una crisis al interior de la política chilena”.

En lo político, lo que se produjo fue un entramamiento progresivo de la capacidad de negociar y alcanzar acuerdos por parte de los partidos. El alejamiento de las prácticas aliancistas, que llegó a su clímax en los años sesenta, es congruente con el elevado grado de polarización ideológica que alcanzó la política chilena (y no sólo la chilena) a fines de los sesenta, y que condujo a una imposibilidad creciente para constituir mayorías de gobierno. Y esta polarización no fue algo que ocurriera únicamente a nivel de las cúpulas políticas, sino que se filtró y extendió casi diría a lo largo y ancho de nuestra sociedad. Se filtró y agudizó hasta llevar a una creciente legitimación de la violencia política, especialmente en la izquierda, a través del MIR y de sectores del Partido Socialista. En esto tuvo un enorme impacto la Revolución Cubana, que —como señalara Tomás Moulian—hizo concebir la opción armada ya no como una cuestión instrumental, sino “como gesta épica, como sacrificio y entrega de sí, conectándose con las profundas raíces católicas de la cultura latinoamericana”.

En fin, en medio de estos desencuentros y polarizaciones, a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta terminó el tácito acuerdo existente hasta ese momento en torno al modelo europeo, y se impuso en su lugar la idea (compartida, otra vez, por izquierda, centro y derecha) de que aquél estaba agotado, que había que abandonarlo y partir con algo nuevo, oportunidad que cada tercio aprovechó para sacar a relucir su propia y exclusiva fórmula destinada a “sacar el país adelante”. El mesianismo se expandió como la peste, mientras la cultura de transacción, negociación y búsqueda de acuerdos entre los partidos se deslegitimó al extremo. Colapsó, entonces, cualquier espacio para construir coaliciones capaces de sostener un gobierno de mayoría, con la fuerza necesaria para hacer frente a las tensiones sociales, económicas y políticas de la época. Esta es una época marcada además —no hay que olvidarlo— por la intensificación de la guerra fría, cuyos dos grandes protagonistas, Estados Unidos y la Unión Soviética, hicieron de Chile un escenario simbólico para su lucha, un campo de experimentación que no querían que se les fuera de las manos.

Así se llegó a la elección presidencial de 1970. Las tres fuerzas clave (derecha, centro e izquierda) rechazaron cualquier posibilidad de alianza para construir una mayoría. Se terminó entonces con el triunfo de Allende, con apenas 36 por ciento de los votos.

Allende Presidente

Mirado así, Allende no fue el origen, sino la expresión de los vientos de crisis que ya azotaban el modelo histórico chileno. Los cambios estructurales que su gobierno se propuso ya estaban en el ambiente y habían sido incluso promovidos desde la propia Democracia Cristiana, primero a través de la “revolución en libertad” de Frei Montalva, y luego a través del programa de su candidato en la elección de 1970, Radomiro Tomic. En el fondo, el de Allende no era en verdad un programa destinado a cambiar drásticamente la ruta histórica que seguía la sociedad chilena. Se trataba más bien de una radicalización del modelo de capitalismo europeo al cual se había orientado Chile durante la primera mitad del siglo 20, con su reforzamiento de la injerencia del Estado en todos los aspectos de la vida nacional, desde la economía y el mercado a la educación, salud y previsión, y su paralela promesa de superar las desigualdades sociales... las mismas —por otra parte— que nos siguen penando hasta hoy.

La tarea de Allende era difícil, considerando que debía desarrollarla a partir de un gobierno que había estado lejos de obtener mayoría en la elección presidencial y que tampoco la tenía en el Congreso. No obstante, inicialmente su programa pareció funcionar.

Incluso su popularidad y el respaldo a la Unidad Popular (UP) fueron en alza. Pero hacia 1972 surgieron los problemas: aumentaron las presiones para acelerar los cambios, las tomas de industrias provocaron el caos en el mundo productivo, se redujeron la inversión y las reservas externas, la inflación se disparó y comenzó la escasez de productos básicos. Esto último no era un drama para los grupos más pobres, que jamás habían tenido acceso a los niveles de consumo que les ofreció la UP, pero sí lo fue para los sectores medios, que vivieron el desabastecimiento como una tragedia que afectaba su estatus y su estabilidad. Fue así que la clase media —que había mirado con simpatía a Allende— comenzó a darle la espalda.

En ese contexto de crisis económica y polarización política, que se daban en el contexto de las altas expectativas que el gobierno de Allende había despertado en tanta gente, la movilización social se masificó y radicalizó. Las huelgas, tomas y manifestaciones callejeras se hicieron pan de cada día, provocando el caos en la vida cotidiana de la población. El sistema político, ideologizado en extremo, ya era completamente incapaz de apaciguar o canalizar estas movilizaciones. El que podría haber sido punto de equilibrio entre los polos opuestos, el centro político demócratacristiano, veía con angustia su propia erosión, tensionado por el conflicto entre sus corrientes más “izquierdistas” y “derechistas”. Las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento y el Poder Judicial se iban haciendo cada vez más tirantes. Estados Unidos intentaba por todos los medios derrocar a Allende, mientras Fidel Castro hacía lo imposible por extremar las contradicciones para provocar una salida revolucionaria. Y todo aquello ocurría mientras Allende cavilaba ante el dilema de seguir su intuición y adoptar un estilo reformista de corte socialdemócrata acorde con su propio programa de gobierno, o seguir la moda del momento y las recomendaciones de Fidel Castro, e incorporar un estilo de tipo revolucionario. Allende nunca resolvió del todo ese dilema.

De hecho, intentó defender su tesis de una “transición democrática” al socialismo. Como sabemos, buscó incluso el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica y, por su intermedio, de la Democracia Cristiana. Para la DC era difícil un acuerdo, pues se veía presionada por su propia base electoral, que abandonaba el centro para refugiarse en posiciones más derechistas.

No hay que olvidar que entre el final del gobierno de Frei Montalva y comienzos del de Allende, la Democracia Cristiana había sufrido el desgajamiento de sus sectores más cercanos a un entendimiento con la izquierda, primero con el surgimiento del Mapu y después con el de la Izquierda Cristiana. Este factor desempeñó un papel nada de despreciable en las dificultades para alcanzar un entendimiento entre la UP y la DC; aunque hay que recordar —de contramano— que ese hijo de la DC que fue el Mapu proporcionó a Allende un caudal de votos que quizá fue clave en su ajustada victoria de 1970, así como un conjunto de “cuadros” que ejercieron roles relevantes en su gestión gubernamental.

De ese clima de tensiones que afectaban tan directamente a la DC, sin embargo, es necesario rescatar que en varias ocasiones le propuso a la Unidad Popular acercamientos destinados a evitar una mayor polarización. Y que tales iniciativas enfrentaron el rechazo de la mayoría de los partidos agrupados en la UP, que creían que agudizando las contradicciones se podría conseguir más respaldo electoral y avanzar más rápido. Pero no se avanzó más rápido —como se vino a aprender después.

Allende, en suma, nunca fue a fondo con su estrategia reformista, como en su momento (aprendiendo de la experiencia del propio Allende) lo hizo un Enrico Berlinguer en Italia; o después, pero ya sin el peso de la guerra fría, un Felipe González en España.

Allende temió verse obligado a hacer concesiones a la oposición centrista, lo que hubiese significado la ruptura del Partido Socialista y el fin de la Unidad Popular.

En su conjunto, estas situaciones terminaron por abrir las puertas al golpe de Estado de septiembre de 1973, que puso fin trágicamente al sueño de un modelo de desarrollo de tipo europeo. Trágico fin que —hay que decirlo— quizá no significó para parte de la izquierda chilena e internacional una dramática frustración de sus expectativas, pues el golpe contra Allende ponía de manifiesto la imposibilidad de un socialismo democrático y daba un sello de legitimidad al formato revolucionario de tipo castrista. Y esto era quizá precisamente lo que muchos izquierdistas, en Chile y en el mundo, querían probar. De allí que —como señala Slavoj Žižek— Allende se transformara para las izquierdas en un “héroe negativo”, cuya muerte “esperábamos secretamente” para confirmar que “su proyecto estaba destinado al fracaso”.

Un fracaso marcado, esta vez literalmente, a “sangre y fuego”.

Hubo sangre y fuego, sí, pero también recordemos que las Fuerzas Armadas no se entrometieron *motu proprio*. Fue la sociedad civil y los actores políticos quienes las instaron a intervenir ante una situación de caos económico, social y político que amenazaba con terminar en una violencia generalizada. Ciertos sectores (entre ellos el propio Allende) buscaron que las Fuerzas Armadas actuaran a favor del gobierno, mientras otros (la oposición política y el gobierno norteamericano) lo hacían para que interviniesen para derrocarlo. Pero todos, desde la izquierda a la derecha, en 1973 tenían sus ojos puestos en ellas, lo que evidenciaba el alto grado de deslegitimación que había alcanzado el sistema político.

El “sueño americano”

La forma como se desplegó el golpe de Estado marcaría a Chile por un tiempo largo, que aún no termina del todo. El hecho de bombardear y atacar militarmente La Moneda, el símbolo de la democracia chilena, y que Allende muriera defendiéndola, selló un punto de quiebre. A esto siguió la persecución de los partidarios de la Unidad Popular, así como de los dirigentes sindicales y sociales que con sus movilizaciones habían amenazado los derechos de propiedad. Luego se hizo necesario justificar históricamente todo lo que había ocurrido y seguía ocurriendo, que a los ojos del mundo eran actos de barbarie. Pinochet necesitó un relato que le diera sentido de gesta a actos que, al desnudo, eran injustificables. Y después de un primer período de confusión y ambigüedad, el gobierno militar encontró esa justificación histórica en el cambio radical del modelo de desarrollo que Chile había venido siguiendo desde los años treinta.

Con el respaldo intelectual de un grupo de jóvenes economistas formados en la teoría neoliberal de cuño estadounidense, a mediados de los años setenta el nuevo régimen declaró fenecido el modelo de desarrollo que la clase política chilena había tenido como paradigma inspirador por más de cuarenta años. La industrialización vía sustitución de importaciones, la participación central del Estado en el desarrollo económico, la integración social de los grupos marginados y la ampliación de la democracia, pasaron a la categoría de ilusiones abortadas, surgidas de la imaginación delirante de la izquierda, y no del consenso nacional del período y de la intervención de las propias Fuerzas Armadas en los años veinte.

En sustitución de aquella ruta histórica que miraba hacia Europa, el régimen pinochetista planteó un nuevo rumbo, un nuevo proyecto nacional, del cual podría reclamar la paternidad: fundar en Chile un modelo de sociedad de tipo estadounidense. Su modelo —

que llegó a hacérsenos “natural”, aunque ahora es revisado en el mundo entero a raíz de la crisis económica mundial que estalló a partir de Wall Street— apuntaba a una reestructuración total en lo económico, con la reducción a un mínimo de la participación del Estado en el campo productivo y laboral, la liberalización del mercado de trabajo y la promoción de soluciones de mercado en áreas sociales como la educación, la salud y la previsión, entre otras. Para el nuevo régimen, implantar este nuevo orden —“que salvaba a Chile del comunismo”, como proclamó una y otra vez— justificaba con creces la violencia del golpe y la muerte del Presidente Allende en La Moneda.

Con el tiempo —y en otro rasgo peculiar del caso chileno—, la dictadura militar se planteó institucionalizar sus nociones del orden político en una nueva Constitución. Así como en lo económico y social se había implantado un nuevo modelo, en lo político se trataba de fundar un nuevo orden constitucional. En lo esencial, esta Carta consagraba el respeto a la propiedad privada y a las libertades individuales como eje del orden político. Adoptaba, así, la lógica estadounidense, según la cual la libertad es autonomía, la autonomía es propiedad, y ambas se protegen limitando al máximo la acción del gobierno, todo lo cual está en las antípodas del tipo de ordenamiento constitucional que tuvo Chile entre 1925 y 1973.

El resultado de todos estos cambios fue la consolidación, ya a fines de los ochenta, de una sociedad nueva. Una sociedad donde la cohesión no reposa en la capacidad integradora de la estructura jurídica o económica del Estado, sino en la autonomía de los individuos y la libertad de los intercambios económicos. Donde el sistema institucional no se hace cargo de promover la igualdad o la solidaridad, sino exclusivamente de la protección de la propiedad privada y los derechos individuales. Donde opera una economía abierta, regulada por el mercado, basada en la empresa privada y con una mínima y ultra vigilada participación del Estado. Donde los programas de protección social abdican de su vieja vocación universalista, y se orientan focalizadamente a combatir la pobreza. Donde la movilidad social ya no se apoya en el Estado, sino que depende exclusivamente del esfuerzo individual y el apoyo familiar. Donde el Estado se repliega en todos los planos, y se relaciona con la ciudadanía por canales técnicos antes que políticos. Donde la población toma distancia de la política, pues ésta objetivamente constituye una pieza menos relevante en los engranajes que mueven la vida de las personas. Donde la biografía e identidad de cada cual se autonomiza de la pertenencia a grupos o corporaciones. Donde el fracaso es un problema de cada cual y no de un sistema frente al cual se puede protestar, y ante el cual sólo se cuenta con la familia como red de protección. En fin, donde se expande cotidianamente una cultura individualista, racional, pragmática, que hace del consumo la plataforma fundamental de la identidad y la realización de cada uno.

Miedo, confusión y reconstitución

¿Cómo logró imponerse, después de 1973, este nuevo rumbo, este giro radical en la forma de organización de la sociedad chilena? ¿Cómo este vuelco hacia el “sueño americano”, que para muchos fue una pesadilla, pudo hacerse realidad?

Como decía antes, pienso que sin el sacrificio de Allende, esta revolución no hubiese tenido lugar. El giro hacia un modelo estadounidense no estaba en los planes de Pinochet o de las Fuerzas Armadas antes del 11 de septiembre de 1973. Pero con La Moneda en llamas y el espectro de Allende a sus espaldas, había que realizar una revolución a la altura de la tragedia, y nada mejor que romper con el rumbo económico, social y político que traía el

país hasta 1973. Fue el Presidente Allende, con su porfía y heroísmo, quien forzó el giro desde una mera restauración que habría pasado sin pena ni gloria como una interrupción cruenta, pero transitoria, de la democracia chilena, a la revolución del orden económico, político y social chileno. A la hora de los homenajes, por lo tanto, él bien podría reclamar un paradójico lugar entre los padres de aquel cambio de rumbo que sacó a Chile de su ruta histórica y lo puso —hasta el día de hoy— tras el “sueño americano”.

Obviamente que el miedo —un miedo que por mucho tiempo fue el aire mismo que se respiraba en el país— desempeñó un papel decisivo en la imposición del nuevo orden.

Estaba, por supuesto, el miedo a la represión. Pero también ayudó el miedo a vivir nuevas frustraciones como la experimentada por todos los que habían estado con Allende, o el pavor a volver a una situación de caos como la de 1973. Estaba, indudablemente, el miedo de la derecha y del empresariado a una “vuelta a la UP”, que los condujo al respaldo incondicional a la dictadura, incluyendo la violación de los derechos humanos. En las clases medias había miedo también a que el debilitamiento de Pinochet detonara una rebelión violenta de los sectores populares, como pareció ocurrir con las “protestas” de comienzos de los ochenta. Fue así, entonces, que el miedo, un miedo crudo y casi ancestral, se desempeñó como el gran aliado de la obra refundacional de la dictadura. Y hasta que no resurgieron palabras como “solidaridad” y “reconciliación”, parecía no haber cómo enfrentarlo.

Tampoco parecía haber un discurso viable que ofreciera alguna alternativa a la propuesta de Pinochet y su equipo económico. El discurso refundacional de Pinochet ensamblaba además con cierto sentido común: que la crisis del 73 tenía causas profundas, y que había que aprovechar la violencia del golpe militar para encararlas. En el nivel ideológico, en suma, el “sueño americano” no tuvo oposición lo que facilitó enormemente su implantación.

El centro demócratacristiano fue incapaz, hasta los años ochenta, de articular un discurso alternativo, afectado como estaba por serias divisiones internas y el deseo de evitar una nueva ruptura, al estilo de las que había vivido a fines de los sesenta y comienzos de los setenta con la escisión del MAPU y la Izquierda Cristiana.

El caso de la izquierda es diferente. De inmediato se plantó en frontal oposición al régimen militar, en lo que pesó fuertemente el sacrificio de Allende. Así como forzó a Pinochet a emprender un proyecto revolucionario que justificara su muerte en el ataque a La Moneda, la muerte de Allende obligó a la izquierda a descartar cualquier asomo de conciliación con el nuevo régimen, o incluso de pasividad frente a él.

Pero más allá de sus intenciones, lo cierto es que la izquierda sobrevivía apenas en medio de la persecución, situación que la incapacitaba para cuestionar o hacerle frente seriamente al nuevo régimen. Tenía sobre sus espaldas, además, las divisiones y el fracaso del gobierno de la Unidad Popular, que habían desencadenado el caos y luego la violencia del golpe: esto le restaba legitimidad para plantear una alternativa. Internamente estaba dividida entre quienes leyeron el 11 de septiembre como prueba del fracaso de una vía reformista y democrática, y los que lo interpretaron como prueba del fracaso de un discurso maximalista y revolucionario que impidió negociar una solución con la Democracia Cristiana.

Para nosotros, la gente de izquierda, el 11 de septiembre de 1973 fue un quiebre que afectó nuestras vidas profundamente. Vinieron años de dolor, desconcierto y desamparo, volcados casi exclusivamente a la sobrevivencia. El horror del golpe y de la represión era un buen caldo para el cultivo de una visión maniquea, que imputaba toda la responsabilidad de la crisis de la democracia al “imperialismo”, a la “reacción” y a los “militares golpistas”. Esto

recién vino a superarse a fines de los años setenta. A partir de entonces, la reflexión de la izquierda se orientó a poner al desnudo los límites y errores del proyecto y gobierno de la Unidad Popular, en particular su incapacidad para alcanzar un acuerdo de mayoría con la Democracia Cristiana. A todo esto hay que sumar que la izquierda chilena comenzó a perder sus referentes internacionales tradicionales, pues en ese entonces la izquierda mundial entraba en un proceso de fragmentación por la crisis del modelo comunista ortodoxo (en parte como efecto del ejemplo chileno), y surgían, entre otros, el *eurocomunismo* en Italia y el sindicato *Solidaridad* en Polonia.

Así, la reconstitución de la capacidad de la izquierda chilena para levantar una alternativa al régimen militar fue muy lenta. Su gente se fue reagrupando en la defensa de las víctimas de la violación de los derechos humanos. Ahí trabajó codo a codo con la Iglesias cristianas. Los que venían del mundo laico aprendieron a conocerlas y respetarlas, y los que venían del mundo cristiano, a reconocerse nuevamente en ellas. La doctrina de los derechos humanos se fue así incorporando al núcleo mismo de la cultura de izquierda, una vertiente inexplorada hasta 1973. Algo similar ocurrió con la democracia: su quiebre, con todas las desgracias que trajo aparejadas, condujo a que la izquierda le reconociera un valor en sí misma, abandonando las tesis que le asignaban sólo un valor instrumental.

Tuvo que correr mucha agua bajo los puentes y pasar largo tiempo antes de que la izquierda y la Democracia Cristiana fuesen capaces de reponerse de la pesadilla y levantar un discurso y una fuerza alternativa al “sueño americano” de los Chicago Boys y los militares. A nivel de las ideas ello se logró recién en los años ochenta, con la producción de los centros de investigación y reflexión independientes, muchos de ellos amparados por las iglesias cristianas. Y a nivel político esto se fue fraguando en espacios como el “grupo de los 24”, la Alianza democrática, el Comité de Elecciones Libres, y en forma determinante, a través de procesos internos de los partidos, como fue la renovación y convergencia socialista y el movimiento que condujo a la democracia Cristiana a promover una alianza con el socialismo. Posteriormente, todo esto cristalizó políticamente en la Concertación.

Allende y la Concertación

La Concertación reunió a dos fuerzas —el centro democratacristiano y la izquierda socialdemócrata— que se enfrentaron duramente en el pasado. Ella nació (es bueno recordarlo) de la mano de la Democracia Cristiana. Porque la estrategia de transición pacífica a la democracia y la creación de la Concertación tuvieron su origen en la DC. La izquierda, que en los ochenta venía recién saliendo del horror y el desconcierto, se fue sumando a este camino con fuertes tensiones internas, pero la fuerza motriz la puso la DC.

Muchos se han preguntado, a lo largo de estos 20 años, ¿qué explica la pervivencia de esa singular alianza representada en la Concertación?

La Concertación se gestó en torno a la oportunidad que abrió el plebiscito efectuado en 1988; pero ella surge como respuesta a tres fracasos históricos. El primero y principal: el que condujo al fin de la democracia en 1973, que tuvo mucho que ver con la imposibilidad de encontrar un acuerdo entre el centro democratacristiano y la izquierda socialista y comunista. El segundo fracaso dice relación con la estrategia que prevaleció en la oposición a Pinochet hasta mediado los ochenta, según la cual era posible derrotar a la dictadura con la movilización social (las llamadas “protestas”). Y el tercer fracaso es el que se produjo a mediados de los ochenta, después de las protestas: el intento por derrocar al régimen por la vía de una insurrección armada o militar, y que condujo incluso al atentado contra Pinochet

en 1986. Así, la Concertación encarna, en la memoria histórica de los chilenos y chilenas, la lucha contra la dictadura y una transición pacífica a la democracia.

Luego, la Concertación sigue vigente porque ha sabido dar, sin traumas, un giro más “incluyente” al modelo norteamericano, devolviéndoles su lugar a las políticas sociales — fundamentalmente salud, educación y vivienda— y a los mecanismos orientados a la protección e inclusión de los grupos desfavorecidos

Y *last, but not least*, porque ha sabido mantener una convivencia competitiva entre dos grandes corrientes históricas de la política chilena, el centro demócratacristiano y la izquierda socialdemócrata, las que se han alternado casi matemáticamente la hegemonía de la coalición.

En estos tres pilares radica el inmenso capital político de la Concertación, que le ha permitido permanecer veinte años en el gobierno. En ninguna otra parte del mundo existe una alianza permanente e institucionalizada entre las corrientes demócratacristiana y socialista. Lo que se verifica es, más bien, una competencia feroz entre ellas por ganar para sí el respaldo de las clases medias y los sectores populares. Por lo mismo, no es extraño que analistas hayan interpretado la unión de estas dos corrientes en Chile como una anomalía, como el fruto efímero de una situación de emergencia, inevitablemente destinado a desaparecer.

Sin embargo, contra todos los malos augurios y pronósticos, la Concertación se ha mantenido. Es más, ha encontrado la forma de renovarse, haciéndose cargo de los nuevos temas de la sociedad chilena de hoy, desde el crecimiento económico a la igualdad social, pasando por la innovación, la defensa de las minorías, la promoción de la diversidad y la protección del medio ambiente. Como si fuera poco, se dio el lujo de elegir a la primera mujer Presidenta de Chile, dando una señal de cambio sólo equivalente a la de 1990, cuando esta coalición de centro-izquierda lideró el tránsito a la democracia.

Todo esto debiera conducir a mirar la Concertación con otros ojos: no sólo como el resultado de la lucha antiautoritaria y el plebiscito, sino como expresión de un fenómeno histórico mucho más profundo, en cuyo centro está la figura y el sacrificio de Salvador Allende.

Hay una profunda continuidad, en efecto, entre la Concertación y la cultura de alianzas entre el centro y la izquierda que marcó parte importante del siglo 20 chileno, y que tuvo en Allende un protagonista crucial. Esa cultura de alianzas fue, de hecho, la base del impulso de las reformas políticas, económicas y sociales que permitieron la implantación de lo que aquí se ha llamado el “modelo europeo”. Pero el orden pactado sobre el cual se había sostenido tan largamente la república, se quebró en los tiempos de la polarización política de los años sesenta y setenta, cuando los efectos de la guerra fría se hacían sentir en toda América Latina. Entonces fracasaron todos los intentos por sobreponerse a ese clima y reponer el entendimiento entre la izquierda y el centro, incluso cuando la crisis de la democracia estaba *ad portas*. Trabajosamente, sin embargo, una vez terminada la guerra fría e internalizadas las lecciones de la crisis de la democracia en Chile por los diferentes actores políticos, con la Concertación se restableció la tradición política chilena de la alianza entre el centro y la izquierda en torno a un modelo compartido de desarrollo —el que Castells bautizara como “democrático liberal incluyente”.

Si hay, por lo tanto, una excepción o anomalía histórica, ella no está en la unión entre estas dos corrientes, el centro y la izquierda, como se verifica hoy en la Concertación. Ella está, más bien, en el quiebre que se produjo entre ellas a raíz de la polarización ideológica de fines de los sesenta y comienzos de los setenta.

Ninguna de las corrientes políticas que convergen en la Concertación está, con ello, traicionando su propia historia. Esto no es así para el socialismo de corte socialdemócrata, que en realidad nunca se sintió del todo cómodo en su alianza con el Partido Comunista, como ocurrió en la Unidad Popular. Y para la Democracia Cristiana, la Concertación continúa con una larga historia de trabajo con la izquierda vigente desde antes de 1964.

De hecho, la DC llegó a proclamar a fines de los sesenta la necesidad de la “unidad popular”, lo que equivalía a tener un candidato único con la izquierda para las elecciones de 1970. Tal tesis fue derrotada estrechamente en su Congreso de mayo de 1969 por la alternativa del “camino propio”, provocando de paso la escisión del sector “rebelde”, que formó el Mapu, para plegarse a la izquierda socialista-comunista. Pero no hay que olvidar que, después del estrecho triunfo de Allende en las elecciones de 1970, la DC lo respaldó en el Congreso Pleno frente al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, para ser elegido Presidente de la República, resistiendo las más inusitadas presiones tanto internas y externas. Como señala en un libro-testimonio Patricio Aylwin, refiriéndose a este episodio: “Entre Alessandri y Allende, en ese momento preferí a Allende, porque creí que con su triunfo había posibilidades de seguir avanzando hacia un Chile más justo, más a tono con los tiempos, y que nosotros podríamos ser parte de esa tarea”.

En suma, ni el socialcristianismo ni el socialismo democrático chilenos rompieron con su historia al unirse en la Concertación; al contrario, están reencontrándose con ella y con su vocación. Ambas son corrientes progresistas que ya en el pasado habían colaborado y estado cerca de formar una coalición; que comparten una misma historia de éxito en los últimos veinte años, tanto en términos de la recuperación democrática como de las reformas al modelo de desarrollo; y que se sienten más cómodas trabajando juntas que haciendo alianzas con otras fuerzas.

Este encuentro llamado Concertación no hubiese sido posible, sin embargo, sin la tradición política y la lección dejada por Allende: la protección de la democracia en su sentido más fundamental, y la perseverancia en hacerla cada día más incluyente, exigen ir más allá de los que quizá pueden considerarse “límites naturales” de personas e instituciones.

Hacia una memoria compartida

Mirando hacia atrás, es casi imposible eludir la sensación de que nuestra historia del último siglo sería difícilmente representable —si recurrimos al lenguaje del cine— por un “plano continuo”, y que casi obligatoriamente deberíamos recurrir a los más violentos “montajes” para representar las rupturas que le han ido dando la forma que tiene. O quizá sea que sólo a través de las crisis, las rupturas y los cambios se hacen *relatables* las historias —las personas felices no tienen historia, decía Simone de Beauvoir, y a lo mejor tampoco los países—. Pero el hecho es que los países también necesitamos relatar nuestras historias para que las cosas tengan sentido. Sobre todo cuando se trata de hechos tan violentos y disruptivos como los que nos llevaron hasta La Moneda en llamas y todo lo que ha sobrevenido desde entonces, con sus luces y sus sombras.

Siento que el relato de esta historia aún nos pena como país, y sólo si nos adentramos en sus raíces, sabiendo cómo fue que nos sobrevino, quizás podamos hacer las paces con ella. Porque necesitamos siempre, y quizás muy especialmente en estos cambios de folio que marcan centenas de años, comprender la sociedad en que vivimos y sus cambios. A lo mejor decirnos, como dice Dickens, “fue el mejor de los tiempos, fue el peor

de los tiempos, fue la edad de la sabiduría, fue la edad de la locura, fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de la desesperación...”

Traigo todo esto a la conversación porque pienso que la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Allende ha vuelto a poner sobre el tapete un período histórico que no logramos resolver del todo, un período que —como país— no hemos logrado encarnar en un relato *común*. Un relato que nos devuelva el sentido de nación.

Una nación —decía Renan en 1882— es un principio espiritual, que está conformado por dos cosas: una es el pasado —más bien, el relato que se construye y se cuenta de lo que pasó—, y la otra es el presente. Una es la posesión en común de un legado de memorias; la otra es el deseo de vivir juntos y seguir apreciando la herencia que uno ha recibido como una posesión en común.

¿Cuál es ese “principio espiritual” que nos hace sentirnos chilenos? ¿Cuál es la herencia común que se ha ido formando a través de los diferentes episodios de nuestra historia? Son preguntas que rondan entre nosotros como fantasmas y, como tales, no dejan de perturbarnos y de inquietarnos.

Estamos muy cerca ya de la conmemoración del Bicentenario. Esta es, creo, una buena ocasión para reflexionar a fondo acerca de la idea que nos mueve como país; acerca de la memoria que compartimos, así como los mitos y fantasías comunes que nos inspiran. De deliberar, en fin, acerca del nuevo “sueño chileno”.

¿Estaremos dispuestos los chilenos a explorar en el origen de la pasión que nos ha unido como amigos, así como del odio que nos ha enfrentado como enemigos? ¿Estaremos dispuestos a reconstruir una memoria compartida que integre las perspectivas de cada uno? ¿Tendremos la voluntad —unos y otros— para renunciar a la verdad a la que nos hemos sujetado para alcanzar una comunidad de memoria?

Ojalá aprendamos de Allende, y tengamos ahora, en este Bicentenario, el coraje necesario para intentarlo.